



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicación: 05001-31-05-017-2023-00047-01  
Demandante: John Jairo Palacio Rodríguez  
Demandado: AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E.  
Asunto: Apelación de auto  
Procedencia: Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín  
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique  
Tema: Excepción Previa de Prescripción

**Medellín, agosto treinta (30) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante John Jairo Palacio Rodríguez, respecto del auto que resolvió la excepción previa de prescripción, proferido el 08 de agosto de 2023 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por John Jairo Palacio Rodríguez contra la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-21-05-017-2023-00047-01.

**1.- ANTECEDENTES**

## 1.1.- DEMANDA

El señor John Jairo Palacio Rodríguez instauró demanda ordinaria laboral pretendiendo, de manera principal, se declare que la AFP Protección S.A. violó su derecho de libre escogencia de régimen pensional, y que, por ello, debe resarcirlo, reliquidando el monto de la pensión de vejez que percibe, aplicando para ello los presupuestos normativos previstos para el Régimen de Prima Media.

De forma subsidiaria - *primera*, pretende se declare la AFP Protección S.A. trasgredió su derecho de libre escogencia de régimen pensional, y en razón de ello, debe indemnizarlo, reconociéndole el valor indexado de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con el traslado de régimen pensional.

Finalmente, y de manera subsidiaria - *segunda*, pretende se declare la ineficacia de su afiliación al régimen de ahorro individual; se ordene a la AFP Protección S.A. trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual; se ordene a Colpensiones E.I.C.E. recibir dichos aportes, incorporarlos a su historia laboral, y reconocerle la pensión de vejez (doc.01, carp.01).

## 1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada judicial legalmente constituida, **Colpensiones E.I.C.E.** se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas en su contra, y de fondo excepcionó la inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora; inoponibilidad de la responsabilidad del fondo privado; responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe; y prescripción (doc.07, carp.01).

Por su parte, la **AFP Protección S.A.** resistiendo la prosperidad de las pretensiones, excepcionó la falta de causa para pedir; inexistencia de las obligaciones demandadas; y prescripción, indicando, respecto de esta última, que

desde el momento en el que reconoció la pensión de vejez en favor del señor John Jairo Palacio Rodríguez, 01 de febrero de 2023, y hasta la fecha en que se radicó la demanda, 02 de febrero de 2023, feneció el término previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, operando la prescripción extintiva respecto al derecho de solicitar el pago de los perjuicios presuntamente derivados del traslado de régimen pensional (doc.08, carp.01).

### **1.3.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 08 de agosto de 2023, advirtiendo que la excepción de prescripción tiene naturaleza de previa y de mérito, esto es, mixta, y en ejercicio de las facultades que le asisten al juez como director del proceso, la resolvió como previa en el sentido de declararla probada, condenando en costas al señor John Jairo Palacio Rodríguez en favor de la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., y ordenando el archivo del proceso (doc.15, carp.01).

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

El poderhabiente judicial del señor **John Jairo Palacio Rodríguez** interpuso el recurso de apelación procurando que se revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, se declare no probado el medio exceptivo propuesto, sustentando que la *a quo* interpretó de forma errada los planteamientos que se hicieron en la demanda, por cuanto, las pretensiones principales no están encaminadas al resarcimiento de los perjuicios, sino a la reparación del derecho in natura a la pensión de vejez, prestación que ostenta el carácter de imprescriptible (minuto 00:21:00, doc.16, carp.01).

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el vocero judicial del señor **John Jairo Palacio Rodríguez** reiteró lo indicado en la sustentación del recurso de apelación insistiendo en que lo solicitado de forma principal no es la reparación de los perjuicios, sino que se declare la violación del derecho a la libre escogencia del régimen pensional, y que se ordene la *reparación in natura* del actor mediante el reajuste de la pensión de vejez reconocida, pretensión intrínseca al reconocimiento pensional que de conformidad con el artículo 48 superior es imprescriptible (doc.03, carp.02).

Por su parte, la vocera judicial de **Colpensiones E.I.C.E.** solicitó que se confirme la decisión de primer grado alegando que el demandante se encuentra pensionado desde el 01 de febrero de 2013 y solo radicó la demanda el 02 de febrero de 2023, estando prescrito todo lo solicitado (doc.04, carp.02).

## **2.- CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por parte del señor **John Jairo Palacio Rodríguez** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y lo previsto en los artículos 65 y 66 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

### **2.1.- PROBLEMA JURÍDICO**

¿Si los derechos pretendidos a través de este proceso por el señor John Jairo Palacio Rodríguez se extinguieron por el simple transcurso del tiempo, o si son imprescriptibles por estar relacionados con prestaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social?

### **2.3.- TESIS DE LA SALA**

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual lo pretendido por el demandante de forma principal y subsidiaria - *primera*, no es otra cosa que la indemnización total de los perjuicios derivados del acto jurídico de traslado de régimen pensional, los cuales, conforme a lo adocinado por la jurisprudencia, prescriben transcurridos tres (3) años desde el momento en que el afiliado adquiere el estatus de pensionado.

Sin embargo, la decisión de primer grado será **modificada** en el sentido de precisar que la excepción previa de prescripción solo alcanzó prosperidad respecto de las pretensiones principal y subsidiaria – *primera*, referidas a la indemnización total de perjuicios derivados del acto jurídico de traslado de régimen pensional; y **revocada**, en cuanto ordenó el archivo del proceso, para en su lugar, ordenar continuar con su trámite respecto de la pretensión subsidiaria - *segunda*, referida a la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado, la cual, por no ser susceptible de prescripción, y al no haber sido objeto de desistimiento por la parte actora, deberá resolverse de fondo en la sentencia.

## 2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

### 2.4.1.- De la excepción previa de prescripción

El artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, establece:

*“ARTICULO 32. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo”*

Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó:

*“No sobra recordar que las excepciones de prescripción y cosa juzgada tienen naturaleza objetiva. Su acreditación se produce mediante la contabilización del transcurso del tiempo, en el caso de la prescripción, al margen de la intención, el ánimo o la razón por la cual el acreedor permaneció inactivo. Además, su declaratoria anticipada, en la primera audiencia, sólo es posible cuando existe certeza sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, o de su interrupción o suspensión. De manera que si se presenta alguna discusión en torno a estos tópicos su decisión se diferirá a la sentencia” (C-820-2011).*

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó:

*“Así las cosas, no es que la ley permitió una mutación de la naturaleza jurídica de la excepción de prescripción, es decir, que haya cambiado de ser una excepción de fondo a dilatoria, sino que, se itera, por economía procesal y celeridad, al juez laboral le es dable resolverla en la primera audiencia de trámite, siempre y cuando, como lo establece el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 19 de la Ley 712 de 2001, “no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión”. (CSJ SL del 25/07/2006, radicado 26939, reiterada, entre otras, en la Sentencia SL3693-2017).*

Ahora bien, el artículo 2512 del Código Civil define la prescripción como *“un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”*; adicionalmente, el artículo 2535 ibídem preceptúa que *“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”.*”

De manera especial, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la regla general de prescripción en materia del derecho de trabajo y la seguridad social:

*“ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.*

Asimismo, desde la óptica procesal, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, prevé el mismo término de tres años, para la extinción de la acción:

*“ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.*

Memórese, igualmente, que el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que *“El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.*

Finalmente, y en lo concerniente específicamente al derecho de libre elección de régimen pensional respecto de quienes tienen consolidada la calidad de pensionados, la jurisprudencia tiene adoctrinado:

*“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo anterior), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.*

*(...)*

*Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa)*

y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.

*El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.*

En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento” (CSJ SL373-2021, reiterada, entre muchas otras, en las Sentencias SL3535-2021, SL3707-202, SL5169-2021, SL3871-2021, SL5653-2021, SL5704-2021, SL5174-2021, SL5172-2021, SL655-2022, SL1108-2022, SL1113-2022, SL2480-2022, SL1577-2022, SL2160-2022, SL591-2023, SL1242-2023, SL1513-2023 y SL1803-2023).

En el *sub juice* se encuentra acreditado que el señor John Jairo Palacio Rodríguez nació el 08 de junio de 1958 (pág.45, doc.01, carp.01), se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 01 de mayo de 1976 (págs.46-53, doc.01, carp.01), se trasladó a la AFP Protección S.A. el 11 de octubre de 1996 (pág.54, doc.01, carp.01), a quien le solicitó el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez el 01 de febrero de 2013, prestación que fue reconocida el 14 de mayo del mismo año, bajo la modalidad de retiro programado, a partir del 01 de febrero de 2013, con una mesada inicial de \$918.701, y en razón de 13 mesadas al año (págs.73-75, doc.01, carp.01).

Así las cosas, y al tenor de la regla fijada por la jurisprudencia, esta corporación colige que al señor John Jairo Palacio Rodríguez, ante la presunta vulneración o trasgresión del derecho de libre escogencia del régimen pensional por parte de la AFP Protección S.A., por el supuesto incumplimiento del deber de información cuando se produjo el traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, en efecto, le asistía el derecho a reclamar la indemnización total de perjuicios a cargo del fondo privado, indemnización que sufre los efectos



extintivos del fenómeno de la prescripción, sino se reclama dentro de los tres (3) años siguientes al momento en que adquirió el estatus de pensionado.

Sin embargo, está demostrado que el señor John Jairo Palacio Rodríguez se encuentra pensionado desde el 01 de febrero de 2013 (págs.73-75, doc.01, carp.01), y que solo solicitó la indemnización total de perjuicios, mediante derecho de petición radicado en la AFP Protección S.A. el 21 de septiembre de 2022 (págs.76-78, doc.01, carp.01), calenda para la que habían transcurrido ocho (8) años, siete (7) meses y veintiún (21) días, desde la *fecha de exigibilidad de la pretensión de indemnización* (SL373-2021), superando con creces el término trienal que extingue el derecho a la indemnización total de perjuicios, en los términos previstos en la premisas normativas y jurisprudenciales descritas en las líneas que anteceden.

Y aunque la indemnización total de perjuicios en favor del pensionado podría consistir en ordenar “... *el pago a cargo de la AFP de la diferencia entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella que hubiese tenido en el RPMPD, esto es, imponer el pago de una renta periódica en los mismos términos en que lo habría hecho el régimen de prima media con prestación definida, tanto para el pensionado como para sus potenciales beneficiarios, ordenando compensar o restituir todo aquello a lo que haya lugar*” (CSJ SL3535-2021), ésta sola circunstancia no determina que la reparación del daño esté íntimamente ligada con el reconocimiento y pago de una prestación pensional de carácter irrenunciable e imprescriptible, o que corresponda, en sentido estricto a la reliquidación de la misma prestación.

De consiguiente, esta corporación concluye que la cognoscente de primer grado interpretó la demanda, no solo con base en la lectura de lo narrado en el acápite de los hechos, o lo solicitado en el capítulo de las pretensiones, en las que, de forma principal se pidió el *resarcimiento*, y de forma subsidiaria – *primera* se solicitó la *reparación*, siendo conceptos semejantes, análogos o sinónimos, sino también, y principalmente, aplicando el precedente jurisprudencial que rige la materia (SL373-2021, SL1956-2023).

Finalmente, conviene precisar que la *reparación in natura del daño*, también denominada en el derecho comparado como *reparación en especie* o *resarcimiento en forma específica*, no es otra cosa que acercar al damnificado a la situación en la que se encontraría si no hubiera existido el evento dañoso, lo que, conforme a lo señalado por la jurisprudencia, correspondería a la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora que incumplió el deber de información, derecho que en el caso del señor John Jairo Palacio Rodríguez, se itera, se extinguió por el fenómeno extintivo de la prescripción, esto es, por no haber sido reclamado oportunamente.

#### **2.4.2.- Del principio de consonancia y los derechos fundamentales**

Ahora bien, se encuentra demostrado que el señor John Jairo Palacio Rodríguez solicitó de forma subsidiaria – *segunda* la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado de régimen pensional, y que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible, conforme a lo adocinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien sobre el particular ha precisado:

*“En efecto, de manera reiterada y pacífica, la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ello. Dicho de otro modo: no prescriben los hechos o estados jurídicos, pero sí los derechos u obligaciones que dimanen de esa declaración. De allí que sea viable la declaratoria de una situación jurídica y a continuación declarar prescritos los derechos patrimoniales derivados de ese reconocimiento.*

(...)

*Lo dicho cobra más sentido en relación con la pretensión de «ineficacia», en la medida que dicha consecuencia impuesta por el ordenamiento jurídico se caracteriza porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos. La sentencia que declara la ineficacia de un acto, en realidad, lo que hace es comprobar o constatar un estado de cosas (la ineficacia) surgido con anterioridad al inicio de la litis. Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la*

*ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.*

(...)

*Por consiguiente, para la Corte es claro que la acción de inejecación del traslado de régimen pensional es imprescriptible, como también lo es el derecho ciudadano a reivindicar un derecho pensional e incluso a mejorar su prestación en cualquier tiempo, pues, recuérdese, «la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa». De allí que «la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habiliten a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho» (CSJ SL8544-2016)” (CSJ SL1688-2019, reiterada entre otras en las sentencias SL4360-2019, SL373-2021, SL1467-2021, SL1465-2021, SL2929-2022, SL4322-2022, y SL932-2023).*

Sin embargo, también es del caso relieves que la cognoscente de primer grado no declaró prescrita la acción de acción de inejecación del traslado del señor John Jairo Palacio Rodríguez del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, sino que la declaró improcedente aduciendo que, conforme a las reglas de interpretación fijadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando un pensionado invoca la vulneración o trasgresión del derecho de libre escogencia del régimen pensional, no es posible retrotraer las cosas al estado inicial, y al mismo solo le asiste el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio que hubiere sufrido por el incumplimiento del deber de información a cargo del fondo privado, esto es, se pronunció **de fondo y por fuera de la oportunidad procesal**, sobre la prosperidad de la pretensión subsidiaria – *segunda*, circunstancia que no fue objeto del recurso de alzada, razón por la cual, en principio, esta corporación tendría que abstenerse de emitir pronunciamiento al respecto, dado que es el recurrente quien delimita la competencia para desatar la alzada, sin que sea posible extenderla a temas no propuestos, esto es, porque la presente decisión solo podría recaer sobre los

específicos puntos sometidos a consideración planteados en el recurso de apelación, que en este caso se circunscriben a los efectos del fenómeno extintivo de la prescripción sobre la pretensión de indemnización total de perjuicios.

Lo anterior, porque conforme a lo previsto en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, este postulado impone que “... *tanto la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación*” (CSJ SL10405-2014); ello significa que el juez de segundo grado está sujeto a las materias específicas y debidamente sustentadas en la apelación que se haga contra la decisión primigenia, y bajo esta lógica, el juzgador de segunda instancia no tiene competencia para resolver otros aspectos ajenos a la relación jurídico procesal, sino estrictamente aquellos controvertidos por las partes en el recurso vertical.

No obstante, es preciso recordar que mediante sentencia C-968-2003, la Corte Constitucional condicionó la aplicación de la figura de la consonancia en materia laboral, bajo el entendido de que “... *las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador*”, imponiéndole al *ad quem* la obligación de pronunciarse sobre las materias relacionadas con los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales “... *de modo que tales aspectos que de forma implícita estén cobijados en la impugnación, hacen parte de su competencia funcional, siempre y cuando: (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados*” (CSJ SL2808-2018).

Adicionalmente, la jurisprudencia ha admitido que el principio de congruencia tiene excepciones precisas en el ordenamiento jurídico, como cuando: “(i) *el juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes, según lo previsto en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social* (CSJ SL466-2013); (ii) *existen hechos sobrevinientes* (CSJ SL3844-2015 y SL2808-2018), y (iii) *la posibilidad del juez en materia laboral de decidir por fuera de lo pedido (extra petita) o más*

*allá de lo suplicado (ultra petita), conforme lo prevé el artículo 50 ibidem”* (CSJ SL440-2021).

En la causa analizada la Sala considera que la decisión adoptada por la cognoscente de primera instancia, al declarar la improcedencia de la pretensión subsidiaria - *segunda*, durante la etapa de decisión de excepciones previas, sin ser ésta una cuestión dilatoria, implicó un sacrificio del derecho sustancial del demandante y una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la justicia material (artículo 29 de la CP), y en tal sentido, la decisión de primera instancia será **modificada** en el sentido de precisar que la excepción previa de prescripción solo alcanzó prosperidad respecto de las pretensiones principal y subsidiaria – *primera*, referidas a la indemnización total de perjuicios derivados del acto jurídico de traslado de régimen pensional; y **revocada**, en cuanto ordenó el archivo del proceso, para en su lugar, ordenar continuar con su trámite respecto de la pretensión subsidiaria - *segunda*, referida a la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado.

Sin costas en esta instancia, por no haberse causado, y en la medida de su no comprobación.

### 3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

### RESUELVE

1.- Se **MODIFICA** el numeral primero del auto que declaró probada la excepción previa de prescripción, proferido el 08 de agosto de 2023 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por John Jairo Palacio Rodríguez contra la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., únicamente en el sentido de precisar que el referido

medio exceptivo solo alcanzó prosperidad respecto de las pretensiones principal y subsidiaria – *primera*, referidas a la indemnización total de perjuicios derivados del acto jurídico de traslado de régimen pensional.


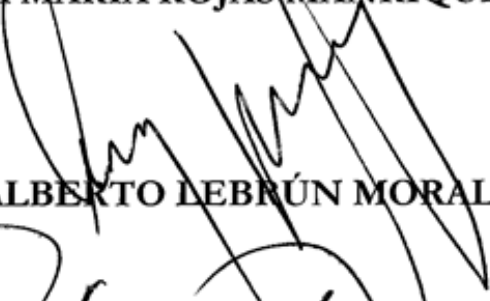

2.- Se **REVOCA** el numeral tercero del auto de fecha y origen conocidos, y en su lugar, se ordenar continuar con su trámite respecto de la pretensión subsidiaria - segunda, referida a la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado.

3.- Sin costas en esta instancia.

Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado en los Estado N°151 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 31 de agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS  
Secretario